

La consulta plantea si la comunicación de los datos descritos en la misma, mediante una advertencia previa al usuario en el momento de registrarse, resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Del tenor de la consulta se desprende que los datos recabados por el responsable del fichero, que ha instaurado un foro de participación, en el que se pueden verter todo tipo de opiniones, se comunicarán a aquellas personas que pudieran sentirse ofendidas por las declaraciones efectuadas por otro usuario.

Como cuestión previa, debe indicarse que la comunicación de la documentación referida, constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado”.

En relación con la cesión de datos, el artículo 11.1 de la Ley dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. El consentimiento deberá ser otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quién se pretende comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

La obligación de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos enumerados en el artículo 11.2 se prevén las excepciones a la necesidad del consentimiento para que la cesión de datos pueda ser efectiva y así se establece que nos será necesario dicho consentimiento:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos

A la vista de lo expuesto por la consultante en su escrito, parece deducirse que se ha optado por comunicar los datos recabados en el momento de registrarse a todo aquel que los solicite, por lo que no le resultará de aplicación ninguna de las excepciones a la que refiere el artículo 11.2 anteriormente señalado.

Para que la cesión pueda ampararse en el consentimiento, éste debería expresar con absoluta claridad quienes serán los destinatarios de los datos, así como la finalidad para la que los datos son cedidos, debiendo recordarse a estos efectos que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 prevé que los datos no podrán ser utilizados para fines distintos de los que motivaron su recogida.

Dicho lo anterior, para que sea pueda entenderse otorgado el consentimiento para la cesión de los datos, es necesario que entre las obligaciones de la empresa que realiza la consulta como responsable de la página web en la que se produce el registro de usuarios, está la de obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento o posible cesión de sus datos y la de informar sobre los derechos que les asisten (de rectificación, cancelación, acceso y oposición), así como sobre la identidad y dirección del responsable y sobre el uso que se va a dar a esos datos. Estas obligaciones suelen cumplirse mediante formularios y cláusulas a los que se accede a través de enlaces como pueden ser “aviso legal” o “política de protección” siendo necesario, que los afectados no puedan introducir dato alguno en la base de datos sin antes tener conciencia del citado aviso y “aceptarlo”.

Por otro lado, el consentimiento al que hacíamos referencia deberá ser, tal y como prevé el artículo 3 i) de la propia Ley, libre, inequívoco, específico e informado, con indicación al afectado de la totalidad de los extremos a los que se extiende el deber de información, consagrado por el artículo 5.1 de la Ley, según el cual:

“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de

su representante”.

Ese consentimiento informado habrá de recabarse de tal forma que resulte imposible la introducción de dato alguno sin que previamente el afectado haya conocido la advertencia que contenga las menciones a las que nos hemos referido, pudiendo servir como prueba del consentimiento la acreditación de que el programa impide introducir los datos sin antes haber aceptado el aviso legal al que hemos hecho referencia. Todo ello tiene por objeto asegurar que el consentimiento de los afectados sea efectivamente específico e inequívoco tal y como exige la Ley.

En todo caso, el responsable de la página web deberá proceder a notificar al Registro General de Protección de Datos la creación del fichero de datos que se cree a través de la página web y el tratamiento informático posterior que va a realizar con los datos personales que se recojan, tal y como impone el artículo 26 de la Ley Orgánica, siguiendo a tal efecto lo establecido en el formulario electrónico de notificaciones Telemática de la Agencia, que se encuentra disponible en la dirección, www.açipd.es.